



Manifiesto de Villalar 2022

El año pasado celebramos el V Centenario de la revolución de las Comunidades, aunque por la pandemia no pudimos estar aquí, en la campa de Villalar, donde conmemoramos el Día de Castilla y León. La coincidencia de esta fecha con la formación del nuevo gobierno en Castilla y León nos alienta a impulsar este manifiesto conjunto porque este año resulta de vital importancia recuperar el espíritu progresista de la sociedad castellano y leonesa.

En esta jornada, las organizaciones abajo firmantes, consideramos necesario retomar el espíritu de lucha de los Comuneros para evitar que nuestra tierra vuelva a ser un lugar de retroceso. Para que podamos seguir avanzando hacia un futuro mejor, en igualdad y libertad. El 23 de abril ha sido siempre un símbolo histórico de reivindicación y de lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos sociales y por el progreso de nuestra Comunidad.

Porque los derechos y libertades, que hemos ido conquistando y creíamos consolidados, están amenazados en Castilla y León y en España, por una fuerza de extrema derecha que ha llegado al Gobierno en nuestra tierra de la mano del Partido Popular que, en una decisión irresponsable, convocó las elecciones del pasado 13 de febrero. Lo hizo en medio de la sexta ola de la pandemia, sin haber aprobado los presupuestos nuevos y al comienzo de la gestión, a nivel autonómico, de los Fondos Europeos, unos Fondos que deben ser el motor para hacer de nuestra Comunidad un lugar más respetuoso con la naturaleza y más resiliente en el terreno económico ante las sucesivas crisis que nos llevan golpeando desde 2008. Y para afrontar la crisis climática con una transición justa para todos y todas. Para favorecer esta transición habría que tener en cuenta la movilidad en la Comunidad más amplia de Europa. Y una herramienta fundamental será la mejora de las infraestructuras en la red ferroviaria convencional, que es la que vertebra el territorio, y potenciando el ferrocarril de mercancías para ayudar a la reducción de emisiones contaminantes.

La situación actual, agravada por la invasión rusa a Ucrania, está creando problemas muy serios en empresas y sectores por falta de suministros. Los combustibles y la energía están a precios prohibitivos y el coste de la vida se ha disparado con el IPC en torno al 10%. Esto provoca una pérdida adquisitiva de los salarios muy importante que obliga a seguir planteando las cláusulas de revisión salarial para todos los convenios colectivos y la adaptación necesaria para compensar las retribuciones de las empleadas y empleados públicos.

En Castilla y León, el interés exclusivo del Partido Popular, nos ha llevado a estar casi 4 meses con un gobierno en funciones, es decir, sin gobierno y, ahora, nos encontramos con un gobierno de coalición de composición semidemocrática al estar conformado con la extrema derecha. Una fuerza política que no cree en la Comunidad, que quiere que nuestros órganos autonómicos desaparezcan, que quiere anular a los sindicatos y que no reconoce la memoria histórica. Tampoco cree en la igualdad real entre hombres y mujeres y en el feminismo, que cuestiona, con tintes racistas y xenófobos, la inmigración, que persigue al colectivo LGTBI, que hace listas negras con periodistas y medios de comunicación y que, en definitiva, odia la “diversidad y el pluralismo”, incluido evidentemente el político y el social, y que se aprovecha del sistema democrático para socavarlo.

Es irracional negar la existencia de la violencia machista, con 11 mujeres y un niño asesinado en lo que va de año y con sesenta mujeres asesinadas, de media, cada año. Rechazamos de plano el empeño de la ultraderecha en tratar de convencernos para volver a esconder la violencia de género tras la puerta de los hogares. Eso es lo que pretende la Ley de Violencia Intrafamiliar: desvirtuar la Ley de Violencia de Género, que goza de gran consenso social, desterrar las políticas con las que estábamos avanzando en combatir sus causas y negar el apoyo que necesitan las víctimas. No podemos ni debemos consentirlo por el bien de toda la sociedad. La violencia de género debe ser tratada como una cuestión de Estado y por tanto, también de la Comunidad Autónoma.

También es irracional retroceder en las acciones de conocimiento y reparación que se recogen el Decreto de Memoria Histórica. Después de décadas de silencio nuestra sociedad había logrado un consenso sobre la necesidad de reparar la dignidad de las víctimas del franquismo. Estamos sacando de las cunetas y de las fosas comunes a las personas asesinadas y represaliadas y devolviendo a su lugar en la historia a quienes defendieron la legalidad democrática y republicana. Es lo menos que se merecen ellos y sus familias, la sociedad en su conjunto y la historia de nuestro país y de nuestra Comunidad, y debemos seguir luchando por su recuerdo y dignificación.

En la misma línea el discurso sobre las personas inmigrantes. La inmigración no puede ser un delito porque las personas que llegan a nuestro país buscan una vida mejor y contribuyen a la riqueza de nuestra sociedad ocupando, además, los empleos más precarios. De este fenómeno sabemos mucho los habitantes de esta tierra y de España. Hemos tenido que ser “inmigrantes” en los países de América y de Europa durante tantos años, y, actualmente, con la fuga de muchos de nuestros jóvenes mejor formados que se van al extranjero. La presencia de inmigrantes en nuestros pueblos y ciudades es uno de los pocos revulsivos positivos frente a la creciente despoblación y envejecimiento de la sociedad, un problema al que no se ha dado solución en los más de 35 años de gobierno de la derecha.

Los firmantes nos comprometemos con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, también amenazados en los discursos del odio. Reivindicamos la legitimidad democrática y representativa de los sindicatos en las empresas y su papel en los procesos de negociación y concertación con los gobiernos. Desde el nuevo gobierno se cuestiona la protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de esta Comunidad Autónoma y su articulación a través del Diálogo Social que logra avances para la inmensa mayoría.

En el Diálogo Social con el gobierno del Estado se han logrado las ayudas a personas trabajadoras y a las empresas con los ERTE, aumentar sustancialmente el Salario Mínimo Interprofesional, una importante reforma laboral que revierte, además, los peores aspectos de la anterior normativa y el acuerdo en materia de pensiones. En Castilla y León ha sido posible la creación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Red de protección para las personas y familias vulnerables, la mejora del sistema de la dependencia o medidas de conciliación y de lucha contra la brecha salarial, para ayudar a la integración de las mujeres, jóvenes e inmigrantes, entre otros asuntos. Son acuerdos que incluyen la necesaria promoción del empleo, con propuestas como los Planes de Empleo Locales, tan importantes para los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestra Comunidad. También plantean ayudas para los trabajadores y trabajadoras autónomas, que mantienen servicios esenciales en nuestra sociedad como nos ha enseñando la reciente pandemia, y para las pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayoría del tejido industrial de nuestra Comunidad y que, al igual que el resto de las empresas, deben enfrentarse a los nuevos retos que supone este mundo en permanente cambio. En este sentido, reclamamos políticas más contundentes y específicas para las trabajadoras y trabajadores autónomos, sin empleados y empleadas a su cargo, y para las microempresas de Castilla y León.

Otra de las enseñanzas de la emergencia sanitaria por Covid-19 es que las Administraciones Públicas, a través de las políticas públicas, son la mejor garantía para mantener los servicios y derechos de los que cualquier sociedad avanzada no puede prescindir. No nos podremos considerar una sociedad avanzada si no evitamos que se sigan ampliando las diferencias socio-económicas dentro de la sociedad castellano y leonesa.

Es este también, un buen momento mostrar agradecimiento a cuantas personas han estado trabajando durante los momentos más difíciles de la pandemia por la Covid-19. Nuestro aplauso a todos los sectores esenciales no cesa aunque hayamos superado lo peor de la crisis sanitaria.

Pero el agradecimiento debe convertirse en hechos. Por eso no compartimos las políticas que se han puesto en marcha durante todos estos años desde la Junta de Castilla y León en la sanidad, especialmente con el abandono en la atención primaria, con muchos centros rurales cerrados y con la asistencia presencial muy mermada. También con una atención especializada cada vez más reducida. Se han aplicado políticas que expulsan a profesionales sanitarios de nuestra Comunidad ante los contratos precarios que sufren.

No se puede retrasar más la modernización de las residencias de personas mayores, los centros socio-sanitarios y los centros de personas con discapacidad. Las insuficiencias detectadas durante la pandemia deben llevar a las administraciones a mejorar las ratios de personal, a mejorar la coordinación entre todos los eslabones del sistema y así garantizar el cuidado de los más débiles de la sociedad.

La educación pública ha vuelto a sufrir un nuevo ataque por parte de la Junta de Castilla y León, al canalizar hacia la educación privada, en su inmensa mayoría religiosa, la concesión de nuevas aulas de dos a tres años. Esgrimiendo la falsa libertad de elección de centro dirigen intencionadamente al nuevo alumnado a las aulas de los centros concertados con un objetivo muy claro, que permanezcan en ellas durante toda su educación. Esto va claramente en detrimento de la enseñanza pública que, cada vez más observa cómo se reduce la financiación de los centros públicos. Utilizan, una vez más, fondos públicos con fines privatizadores que restan igualdad de oportunidades a las familias que necesitan estos servicios, transformando el derecho fundamental a la educación en la base de diferencias sociales. Insistimos en la necesidad de potenciar la enseñanza pública incrementando la dotación de profesorado, como ya se hizo en los dos cursos de la pandemia, para hacer frente a las necesidades derivadas de la diversidad del alumnado.

El mundo rural tiene problemas endémicos de falta de servicios que se están agudizando. La desaparición de las oficinas bancarias y la falta de transporte adecuado para llegar a las que aún permanecen, se añade a la lista de agravios que incluye también la falta de acceso a Internet. Las organizaciones agrarias alertan, además, de que el repentino incremento de los costes de producción, entre otros problemas de ahora y de siempre, están ahogando la agricultura y la ganadería. Es nuestra seguridad alimentaria la que está en peligro. Necesitamos garantías de que se cumple la ley de la cadena alimentaria por lo que se deberían arbitrar todos los apoyos necesarios para el mantenimiento de una agricultura y una ganadería sostenibles y de calidad.

Pero, no se pueden dar ayudas a todos los sectores que las necesitan si se empeñan en bajar impuestos. Nos mostramos contrarios a una reforma fiscal que reste ingresos, porque siempre se rebajan los impuestos a los que más tienen y porque necesitamos recursos para mantener nuestros servicios públicos y las prestaciones sociales, que son el salario diferido de la mayoría de la población. También para apuntalar un modelo económico más sostenible que aporte empleo de calidad y consolide un estado del bienestar avanzado. No debemos olvidar que el pago de la deuda en esta Comunidad ya tiene un gasto equiparable a la "tercera consejería" después de Sanidad y Educación, y este agujero seguirá creciendo si menguamos los ingresos fiscales.

Y, entre las cosas que más necesitamos y reivindicamos para el futuro en Castilla y León está la convivencia pacífica y en libertad. Abogamos por mantener el diálogo y la tolerancia frente a quienes promueven el odio y el enfrentamiento. Defendemos la democracia en su dimensión más amplia y no podemos aceptar que la intransigencia de unos pocos lleve a la mayoría a la regresión de épocas de nuestra historia que creemos superadas.

Hacemos un llamamiento a la participación en la fiesta de Villalar de los Comuneros a todas las personas comprometidas con la concordia, con la paz, con la democracia y con el futuro de esta tierra. Juntos y juntas podremos frenar los peligros de la situación actual y, si lo logramos, podremos conformar una sociedad mejor, una Comunidad más cohesionada en lo social y en lo territorial. Una Castilla y León más avanzada, más democrática y diversa, donde puedan vivir con dignidad y orgullo nuestros ciudadanos y ciudadanas, donde nuestros jóvenes puedan construir un futuro prometedor para ellos mismos y para nuestra tierra.

Firmas

Luis Tudanca Fernández
Secretario General PSOE CyL

Pablo Fernández Santos
Coordinador Podemos CyL

Vicente Andrés Granado
Secretario General CCOO CyL

Julio César Martín Nevado
Secretario Participación
Institucional UGT CyL

Juan Antonio Gascón Sorribas
Coordinador Izquierda Unida CyL

Guillermo Ubieto López
Secretario General PCE CyL

Rosa Eva Martínez Gómez
Responsable de Tradecyl

Christina Fulconis Maroto
Portavoz STECyL